



Poder Judicial de la Nación

INCIDENTE DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DE R.S.J.M. EN AUTOS: “R.S.J.M. SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769”.

CPE 33/2018/6/CA3. Orden N° 35.413 Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 11, Secretaría N° 21. Sala “A”.

Buenos Aires, de abril de 2026.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la parte querellante (A.R.C.A.) contra la resolución por la cual el juzgado “*a quo*” dispuso el auto de sobreseimiento respecto de J.M.R.S..

Las presentaciones por las cuales el querellante y la defensa de J.M.R.S. informaron en los términos establecidos por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución recurrida, atento a lo solicitado por la defensa de J.M.R.S. y de conformidad con lo dictaminado por la representación del Ministerio Público Fiscal ante la instancia previa, la señora juez “*a quo*” dispuso: “...*SOBRESEER a J.M.R.S...en orden a la presunta omisión de depósito en el término legal, de las retenciones practicadas a los empleados de R.O.S.A...en concepto de aportes destinados al Sistema Único de la Seguridad Social en los periodos mensuales 8/2015 a 4/2016, con los alcances previstos en el art. 336 inc. 1º del CPPN, en función de lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 27.743...*” (la transcripción es copia textual del original, se prescinde del resaltado).

2º) Que, por el recurso de apelación interpuesto, la parte querellante (A.R.C.A.) se agravió de la resolución recurrida, en tanto sostuvo que “...*J.R.S. resultaba ser uno de los sujetos excluidos por el art. 4 inc. M) de la Ley 27.743 por dos razones: por su carácter de empleador y agente de retención- al haber actuado como tal-; y por encontrarse imputado en una causa penal, la cual se encuentra elevada a juicio oral...*” (la transcripción es copia textual del original, se prescinde del resaltado).

3º) Que, en el caso, se encuentra acreditado –y no controvertido- que J.M.R.S., en carácter de responsable solidario por la



deuda de R.O.S.A., canceló la deuda en concepto de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social de aquella sociedad por los períodos mensuales 8/2015 a 4/2016 con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.743.

Tampoco resulta controvertido el hecho de que se encuentran impagos los aportes destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales adeudados por la sociedad por los períodos aludidos, extremo que ninguna de las partes consideró un impedimento a los fines de declarar la extinción de la acción penal respecto del peticionante, conforme la interpretación dada al régimen normativo de la ley de mención.

Asimismo, de las constancias incorporadas a las actuaciones principales y a este legajo, se desprende -y tampoco es objeto de discusión- que J.M.R.S. fue procesado en el marco de la causa CPE 348/2015 -a la cual se acumuló jurídicamente la causa principal CPE 33/2018 a la que corresponde este legajo- que fue elevada a la etapa de juicio oral con fecha 11/05/2018 (confr. certificación de fecha 25/08/23 del CPE 33/2018).

4º) Que, por el art. 1 de la ley 27.743, se creó el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social “*con el fin de lograr el pago voluntario de las obligaciones*” que se detallan en el título I de la misma, y por el art. 2 se establece que “*Los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones*”.

Asimismo, por el art. 3 de la ley 27.743 se regula que quedan incluidas en lo dispuesto por la norma transcrita por el párrafo anterior: “*a) Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o el desistimiento, según corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso, dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado como un*





Poder Judicial de la Nación

reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan regularizado a través del presente régimen; b) Aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran proscripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigir las, y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables; c) Aquellas obligaciones que nacieron en el marco de la ley 27.605; d) Aquellas obligaciones de los agentes de retención y percepción que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo; e) Las obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, incluidos los planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado o no la correspondiente caducidad a dicha fecha; j) Toda obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida en el artículo 4° de la presente ley; g) Las multas por infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, que no se determinen en función de los tributos a la importación o a la exportación, excepto la infracción de contrabando menor”.

Igualmente, por el art. 4° de la misma norma se detalla:

“Quedan excluidos de lo dispuesto por el presente régimen: a) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales; b) Las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART); c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y/o el personal de casas particulares; d) Las cotizaciones correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS); e) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio; f) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE); g) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al artículo 488, Régimen de Equipaje del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones; h) Los intereses -resarcitorios y/o punitivos-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes; i) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración; j) Los condenados -con condena



confirmada en segunda instancia- por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen; k) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen; l) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados -con condena confirmada en segunda instancia- con fundamento en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen; m) **Los agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, y/o en los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 y sus modificatorias y/o en los artículos 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones**” (el resaltado pertenece a la presente).

5°) Que, a su vez, por el art. 5 de la ley 27.743 a la que se viene haciendo alusión se establece que “El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme ” y que “La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte





Poder Judicial de la Nación

de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen”.

Por el mismo artículo se dispone, asimismo, que ***“En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contribuciones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados”*** (el resaltado pertenece a la presente).

6º) Que, entre las obligaciones que constituyen el objeto de protección de los tipos penales previstos por el art. 9 de la ley N° 24.769 y 7 del Régimen Penal Tributario establecido por el art. 279 de la ley N° 27.430, recientemente modificado por la ley 27.799, se encuentran aquellas relativas a los recursos de la seguridad social nacional.

También cabe recordar que *“...por el decreto N° 2284/91 se creó el Sistema Único de la Seguridad Social (S.U.S.S.) y, asimismo, a los fines de unificar la recaudación, por el art. 86 de aquella norma se instituyó la Contribución Unificada de la Seguridad Social (C.U.S.S.) -cuya percepción está a cargo de la A.F.I.P.-D.G.I-, denominación que abarca, conforme a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a todos los aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social (confr. el pronunciamiento del más Alto Tribunal argentino dictado el 6/06/2017: en CSJ 515/2008 (44-S)/CSI. ORIGINARIO, ‘Santiago del Estero, Provincia de c/Administración Federal de Ingresos Públicos s/proceso de conocimiento’ específicamente el considerando 5º del fallo mencionado)...”* (confr. CPE 431/2019/2/CA3, res. del 22/07/2020, Reg. Interno N° 297/2020, CPE 1554/2017/1/CA1, res. del 8/03/2019, Reg. Interno N° 103/19; CPE 1964/2018/1/CA1, res. del 8/06/2022, Reg. Interno N° 234/22; CPE 119/2018/9/CA3, res. del 15/07/2022, Reg. Interno N° 318/22 y CPE 1337/2019/3/CA2, res. del 1/09/2022, Reg. Interno N° 386/22, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara).

7º) Que, de conformidad con lo establecido por el art. 87 del decreto N° 2284/91, la Contribución Unificada de la Seguridad Social comprende: *“...a) Los aportes y contribuciones...con destino al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, b) Los aportes y contribuciones ...con*



destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, c) Los aportes y contribuciones...con destino a la Administración Nacional de Seguro de Salud, d) Los aportes y contribuciones...con destino a la constitución del Fondo Nacional de Empleo, e) Los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales...f) Las contribuciones...con destino a las Cajas de Subsidio y Asignaciones Familiares”.

Por ende, el Sistema Único de la Seguridad Social está integrado por los distintos subsistemas mencionados por el art. 87 del decreto N° 2284/91, a fin de dar cobertura a las diferentes contingencias que pueden surgir en materia de seguridad social, entre los cuales se encuentra expresamente el Régimen Nacional de Obras Sociales.

8º) Que, como consecuencia de las previsiones establecidas por las disposiciones normativas citadas por los considerandos que anteceden, este Tribunal ha establecido en ocasiones reiteradas que “...la omisión de ingresar las sumas retenidas en concepto de aportes correspondientes a los distintos subsistemas que integran el Sistema Único de la Seguridad Social configuraría, por cada período mensual, un hecho único, sin que corresponda escindir el mismo en función del destino de los distintos aportes...” (confr. CPE 100/2013/4/CA2, res. del 22/11/2017, Reg. Interno N° 809/17; CPE 1554/2017/1/CA1, res. del 8/03/2019, Reg. Interno N° 103/19; CPE 1964/2018/1/CAI, res. del 8/06/2022, Reg. Interno N° 234/22; CPE 119/2018/9/CA3, res. del 15/07/2022, Reg. Interno N° 318/22 y CPE 1337/2019/3/CA2, res. del 1/09/2022, Reg. Interno N° 386/22, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara).

9º) Que, no obstante el criterio al que se hizo referencia por el considerando anterior, también corresponde recordar que por el art. 2 de la ley N° 27.743 se permite la adhesión al régimen de regularización previsto por aquella normativa por las obligaciones relativas a los recursos de la seguridad social, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la A.F.I.P. (actual A.R.C.A.), pero se excluyen a los fines de tal acogimiento, entre otros conceptos, a los aportes y las contribuciones con destino al Régimen Nacional de las Obras Sociales (conf. art. 4 de la ley 27.743).

Es decir que, a los fines del acceso al régimen de regularización mencionado, la ley otorga un tratamiento diferente a algunos de los distintos





Poder Judicial de la Nación

subsistemas que integran el Sistema Único de la Seguridad Social al cual se hizo mención por los considerandos 6° y 7° de la presente, y se impide la posibilidad de acogimiento a aquel régimen en el caso de deudas originadas en aportes y contribuciones con destino a las obras sociales.

10°) Que, además, se reitera, por el art. 5° de la ley 27.743 se estableció que *“En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total –de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contribuciones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados”* (el resaltado es de la presente), por lo que, a los fines únicos de evaluar la procedencia de la adhesión al régimen de regularización establecido por la ley 27.743 por las obligaciones relativas al Régimen Nacional de la Seguridad Social, la norma prevé que el suceso único consistente en la evasión de los aportes y contribuciones correspondientes a los distintos subsistemas que conforman el Sistema Único de la Seguridad Social por un mismo período mensual, debe ser examinado en función de los distintos conceptos que lo integran.

La interpretación que se sostiene conduce a concluir que la existencia de una deuda en concepto de aportes y contribuciones con destino a las obras sociales no constituye un obstáculo para acceder a los beneficios previstos por el régimen de la ley 27.743 relacionados con la vigencia de la acción penal (sea la suspensión o la extinción de aquella), en tanto y en cuanto no se verifique, en relación a aquella deuda, la condición objetiva de punibilidad del delito que reprime la evasión de aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social, de acuerdo al criterio señalado por el considerando 8° de este pronunciamiento (confr. CPE 600/2023/4/CA2, res. del 15/12/25, Reg. Interno N° 580/25 de la Sala “B” de esta Cámara).

11°) Que, el criterio al cual viene haciéndose alusión, que ahora tiene previsión legal en el art. 5 de la ley 27.743, es aquél que fue establecido jurisprudencialmente por esta Cámara con relación a situaciones análogas suscitadas en el marco de aplicación de los regímenes previstos por las leyes 27.541, 27.562 y 27.653, conforme surge de lo dispuesto en CPE 537/2018/1/CA1, res. del 1/07/22, Reg. Interno N° 285/22, CPE 1234/2019/1/CA2, res. del 17/02/23, Reg. Interno N° 37/23, CPE 1819/2019/5/CA2, res. del 31/08/23, Reg. Interno N° 378/23 y CPE



1006/2018/1/CA1, res. del 27/10/23, Reg. Interno N° 463/23, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara, y CPE 242/2019/2/CA3, res. del 14/07/23, Reg. Interno N° 306/23, CPE 2004/2018/1/2/CA4, res. del 27/05/24, Reg. Interno N° 231/24 y CPE 790/2022/1/CA2, res. del 29/11/24, Reg. Interno N° 534/24, entre otros, de esta Sala “A”.

12°) Que, en el caso, conforme surge de la reseña efectuada por el considerando 3° de la presente, J.M.R.S., en carácter de responsable solidario por la deuda de R.O.S.A., canceló la deuda en concepto de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social de dicha entidad por los períodos mensuales 8/2015 a 4/2016 con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.743.

Sin embargo, por las constancias incorporadas al legajo se desprende que se encuentran impagos los aportes destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales a cuyo pago la sociedad de mención se encontraba obligada por los mismos períodos. No obstante, se destaca que el monto adeudado supuestamente en concepto de aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales por aquellos períodos no superaría la cuantía establecida como condición objetiva de punibilidad por el art. 7 del Régimen Penal Tributario modificado recientemente por la ley 27.799 (confr. constancias incorporadas a las actuaciones principales CPE 33/2018 y dictamen fiscal de fecha 13/09/2021).

13°) Que, en función de los motivos reseñados precedentemente, toda vez que los importes de las obligaciones impagas por el régimen de obras sociales de los períodos mencionados no superan la condición objetiva de punibilidad prevista por el art. 7 del Régimen Penal Tributario aprobado por la ley 27.799, corresponde concluir que, una interpretación armoniosa de las disposiciones de la ley 27.743 citada por la presente, impone estimar adecuada la solución propuesta por el pronunciamiento en crisis respecto de J.M.R.S. con relación a los hechos únicos de evasión presunta de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social (comprensivo de los aportes destinados a la Seguridad Social y los aportes destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales), por los periodos mensuales 8/2015 a 4/2016 (confr., en sentido similar, entre otros, CPE 735/2015/1/CA6, res. del 02/07/2021, Reg. Interno N° 439/21; CPE 119/2018/9/CA3, res. del 15/07/2022, Reg. Interno N° 318/22; CPE 1234/2019/1/CA2, res. del





Poder Judicial de la Nación

17/02/2023, Reg. Interno N° 37/23; CPE 695/2016/8/CA7, res. del 11/09/2023, Reg. Interno N° 396/23, CPE 1611/2018/3/1 /CA4, res. del 20/10/2023, Reg. Interno N° 457/23, CPE 911/2018/8/CA3, res. del 21/12/2023, Reg. Interno N° 553/2023 y CPE 600/2023/4/CA2, res. del 15/12/25, Reg. Interno N° 580/25 de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 1051/2018/2/CA2, res. del 11/09/2022, Reg. Interno N° 108/22 de esta Sala “A”).

14º) Que, sentado lo anterior, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios deducidos por la parte recurrente por el recurso de apelación interpuesto.

Al respecto, en primer lugar, cabe señalar que las causales de exclusión a las que se hizo referencia por la consideración 4º de la presente fueron previstas legalmente para el régimen establecido por la ley 27.743 conforme se desprende de la lectura de la disposición establecida por el art. 4º de la normativa referida, sin que el legislador hubiese efectuado ningún tipo de distinción en el marco de la aludida disposición a partir de la cual se pudiera inferir que, en supuestos como los que se verifican en el caso -donde la cancelación de la deuda es efectuada con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma de referencia- no resultara necesario verificar la existencia o no de alguno de los supuestos de exclusión previstos legalmente, a los fines de acceder a los beneficios establecidos por el régimen de regularización aprobado por la ley 27.743 (confr. CPE 423/2023/CA1, res. del 15/04/25, Reg. Interno N° 129/25 de esta Sala “A”).

Mediante una interpretación del art. 4º aludido contraria a la expresada precedentemente, se vulneraría la regla de hermenéutica con arreglo a la cual la incongruencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador (Fallos: 304:954, 1733 y 1820; 306:721; 307:518, 314:458; entre otros).

15º) Que, no obstante lo expresado por la consideración previa, y sin perjuicio de la opinión que pudieran tener los suscriptos con relación a si resulta de aplicación al caso de J.M.R.S. la causal de exclusión prevista por el art. 4, inc. m), transcrita por el considerando 4º de la presente, cabe mencionar que, por la certificación incorporada el 20/11/24 al presente legajo digital, se pudo corroborar que, el 3/08/23, en el marco del legajo CPE 348/2015/TO1/7, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 resolvió declarar extinguida la acción penal seguida respecto de J.M.R.S. en



virtud de la adhesión al régimen de regularización previsto por ley N° 27.653 y, en consecuencia, sobreseer totalmente a aquél con relación a los hechos que fueran objeto de aquellas actuaciones, vinculados con la omisión de depositar, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, los importes retenidos en concepto de aportes previsionales de los empleados de la contribuyente R.O.S.A., correspondientes a los períodos enero/2014 (\$ XXXX), febrero/2014 (\$ XXXX), marzo/2014 (\$ XXXX), abril/2014 (\$ XXXX), mayo/2014 (\$ XXXX), junio/2014 (\$ XXXX), julio/2014 (\$ XXXX) y agosto/2014 (\$ XXXX) -vale mencionar que los montos aludidos se encuentran por debajo del umbral punitivo previsto por la modificación reciente del art. 7° del Régimen Penal Tributario, aprobado por la ley 27.799-.

Concedido que fuera el recurso de casación interpuesto por la parte querellante (A.R.C.A.) contra el pronunciamiento de referencia, el mismo fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal con fecha 24/10/2024; decisión contra la cual la querella dedujo un recurso extraordinario federal que fue declarado inadmisibile por el mismo Tribunal.

A su vez, contra la decisión mencionada en último lugar, la querella interpuso un recurso de queja que se encuentra en trámite ante la Secretaría Judicial N° 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, a la fecha, está pendiente de resolución (confr. CPE 348/2015/TO1/7/1/1/RH5, actualización en Sistema de Consulta web de la C.S.J.N.).

16°) Que, en ese orden, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la mera interposición del recurso de queja por recurso extraordinario denegado carece, como regla general, del efecto suspensivo (Fallos 193:138; 232:528; 258:351; 265:336; 286:148; 294:327; 305:1035).

Por otro lado, por el pronunciamiento de Fallos 330:2826, el más Alto Tribunal Nacional aclaró que, si bien en los casos en los cuales se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja por un recurso extraordinario denegado, la sentencia recurrida no adquiere firmeza hasta tanto se resuelva la desestimación de la queja por parte de aquel Tribunal, aquella sentencia se encuentra en condiciones de ser ejecutada, debido a que la interposición del recurso de queja (art. 285 del C.P.C. y C.N.) carece de efecto suspensivo.

Con relación a esta doctrina, se ha expresado:

“...Tradicionalmente, la Corte Suprema defendió el enfoque según el cual la





Poder Judicial de la Nación

mera interposición de una queja por denegación del recurso extraordinario no tiene efecto suspensivo...Frente a esa tradición, en ‘Olariaga’ [Fallos 330:2826] se dio un paso adelante en cuanto a la forma en que habitualmente era leído el art. 285, en la medida en que la Corte dejó de correlacionar la interposición de una queja por recurso extraordinario denegado únicamente con la cuestión de la ejecutabilidad de sentencias. Es decir, la Corte admitió, primero, que en él se regulan dos institutos distintos que no deben ser confundidos (ejecutabilidad y firmeza)...Pero la Corte no se quedó solo con esas reflexiones acerca de la distinción entre la ejecutabilidad y firmeza, sino que agregó a ello una reflexión fundamental para cerrar el círculo que había abierto, porque incluyó en su análisis lo relativo a la ‘ejecutabilidad’ de una sentencia que, conforme lo remarcó en su fallo, aún no se encontraba firme. Para decirlo más claramente, a partir de la distinción entre ‘ejecutabilidad’ y ‘firmeza’ empleada en un caso que para la Corte no estaba firme, habría admitido la posibilidad de que se ejecute dicha sentencia siempre bajo la condición de que se entienda que el fallo no adquirió firmeza sino hasta el momento en que fue dictada la desestimación de la queja por recurso extraordinario denegado. De esta manera la Corte Supremo, si bien consideró incorrecto el criterio del Tribunal Superior de Córdoba respecto a que la sentencia quedó firme con el agotamiento de las vías locales, admitió implícitamente que superada dicha etapa del proceso ya podría haberse dado comienzo a la ejecución de la pena impuesta...” (confr. “Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Hammurabi, 2009, Pablo A. ZALAZAR; “Fallo XII ‘Olariaga, Marcelo Andrés’ Firmeza y ejecutabilidad de las sentencias”, págs. 207/209).

17º) Que, en atención a lo expresado precedentemente, la resolución recaída en el legajo CPE 348/2015/TO1/7 del Tribunal Oral de este fuero mencionada por el considerando 15º de la presente, no obstante no encontrarse firme, se encuentra en condiciones de ser ejecutada.

Por lo tanto, de conformidad con lo que se dispone por el art. 337, segundo párrafo, del C.P.P.N. y por el art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde concluir que el recurso de queja interpuesto por la representación de la A.R.C.A. ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también referido por el considerando 15º de este decisorio, no interrumpe los efectos propios del auto de sobreseimiento dictado respecto de J.M.R.S., que se encuentran vigentes



(confr., en el mismo sentido, Regs. Nos. 539/13 y CPE 758/2007/9/CA2, res. del 10/11/2015, Reg. Interno N° 546/15, CPE 237/2013/4/CA4, res. del 12/6/18, Reg. Interno N° 417/18 y CPE 553/2017/6/CA4, res. del 11/03/21, Reg. Interno N° 124/21 de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 1761/2013/2/CA3, res. del 11/11/20, Reg. Interno N° 369/20 de esta Sala “A”).

18º) Que, en consecuencia, en el caso, se advierte que la causal de exclusión invocada por la parte querellante con fundamento en lo previsto por el art. 4, inciso m), de la Ley 27.743 -basada en el procesamiento oportunamente dictado respecto de J.M.R.S. y en la elevación a juicio oral del expediente CPE 348/2015- carece actualmente de sustento, por cuanto, como surge de la certificación incorporada y de la reseña efectuada anteriormente respecto de los hechos que motivaron dicho procesamiento y la elevación a juicio de la causa, con fecha 3/08/23 -es decir, con anterioridad a la solicitud instada por la defensa de que se declare la extinción de la acción penal por aplicación del art. 5º de la ley 27.743 que diera origen a este legajo- el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 resolvió declarar extinguida la acción penal y disponer el sobreseimiento total del nombrado.

En esas condiciones, habiéndose descartado en el caso la concurrencia de alguno de los supuestos de exclusión previstos para el régimen establecido por la ley 27.743 respecto de J.M.R.S., la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho, así como a las constancias incorporadas actualmente a la causa, por lo que corresponde que sea confirmada.

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto fue materia de recurso.

II. SIN COSTAS (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y devuélvase.

Firman los suscriptos, atento la actual integración de esta Sala (confr. Res. N° 11/2025 de Superintendencia de esta Cámara).





Poder Judicial de la Nación

ROBERTO ENRIQUE HORNOS
JUEZ DE CAMARA

CAROLINA L.I. ROBIGLIO
JUEZ DE CAMARA

ANTE MÍ:

MARIA ALDANA PONCE
PROSECRETARIA DE CAMARA

